

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA LABORAL

CONSULTA - SENTENCIA	
DEMANDANTE	DOLLY EUGENIA CARMONA HINCAPIÉ
DEMANDADO	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES
RADICADO	05001-31-05-008-2019-00038-01
MAGISTRADA PONENTE	MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
TEMA	Corrección de historia laboral
DECISIÓN	Confirma.

Medellín, treinta y uno (31) de octubre de dos mil veintidós (2022)

La Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, integrada por los magistrados ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA, LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZÁBAL y como ponente MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO, en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022 que dispuso adoptar como legislación permanente las normas contenidas en el Decreto Ley 806 de 2020, y surtido el traslado correspondiente, procede la Sala a proferir sentencia ordinaria de segunda instancia dentro del presente proceso, promovido por la señora **DOLLY EUGENIA CARMONA HINCAPIÉ** contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES**

Después de deliberar sobre el asunto, de lo que se dejó constancia en el **ACTA No 048**, se procedió a decidirlo en los siguientes términos:

I. – ASUNTO

Es materia de la Litis, el grado jurisdiccional de consulta a favor de COLPENSIONES, contra la sentencia que profirió el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Medellín, en la audiencia pública celebrada el día 6 de mayo de 2022.

II. – HECHOS DE LA DEMANDA

Como fundamento de las pretensiones incoadas con la demanda, se expuso, en síntesis, que la señora DOLLY EUGENIA CARMONA HINCAPIÉ se encuentra afiliada al régimen de prima media con prestación definida a raves de COLPENSIONES, no obstante, presenta inconsistencias en sus cotizaciones; que le restan 360 días equivalente a 51,28 semanas, pues la administradora de pensiones a pesar de reconocer una cotización de 30 días en un determinado periodo, registra o asienta en la historia laboral un numero de semanas cotizadas inferior a los días efectivamente cotizados, aplicando una indebida imputación de pagos en disfavor de la demandante.

Al no estar conforme con la situación, la actora elevó solicitud de corrección de historia laboral ante COLPENSIONES el día 1° de septiembre de 2018, y, al no obtener una respuesta de fondo, se vio avocada a presentar una acción de tutela, pero la entidad aduce que los periodos faltantes en la historia laboral obedecieron a una imputación de pagos en los términos del Decreto 1818 de 1996, desconociendo con este argumento, que sobre dicha administradora recaía la obligación legal de cobro coactivo frente a los empleadores morosos, causándole así un grave perjuicio a la demandante, quien deberá efectuar más cotizaciones para causar su derecho pensional.

III. – PRETENSIONES

La acción judicial está dirigida a que se ordene a COLPENSIONES a corregir la HISTORIA LABORAL de la señora DOLLY EUGENIA CARMONA HINCAPIÉ, incluyendo un total de 360 días o las 51,42 semanas faltantes, sobre las cuales se efectuó una indebida imputación de pagos por parte de

COLPENSIONES, condenándose a esta última al reconocimiento y pago de las costas procesales.

IV. – RESPUESTA A LA DEMANDA

Una vez admitida la demanda, fue debidamente notificada, procediendo la demandada, a dar respuesta a la misma, a través de su apoderada judicial, según se aprecia a folios 81 al 84 del expediente digital archivo PDF N° 02, manifestando que no le constan los supuestos fácticos relatados por la activa, pero que se tendrán por ciertos los que resulten acreditados en el plenario, se opuso a la prosperidad de las pretensiones formuladas, y propuso en su defensa las excepciones de mérito que denomino: *“INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DE CORREGIR LA HISTORIA LABORAL; IMPOSIBILIDAD DE CONDENA EN COSTAS; y la GENÉRICA”*.

V. - DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

En audiencia pública celebrada el 6 de mayo de 2022, el Juez de conocimiento ORDENÓ a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES, para que dentro del término de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de la providencia, efectúe la corrección de la historia laboral de la demandante DOLLY EUGENIA CARMONA HINCAPIE, incluyendo en su historia laboral los periodos donde efectúo la imputación de pagos y aplicó un numero de cotizaciones inferior al parecer por pagos inexactos, y también condenó a la administradora pública de pensiones al pago de las costas procesales en la primera instancia, fijándole como agencias en derecho la suma de \$1.000.000.

Como fundamento de su decisión, estimó la juez de primer grado que la entidad accionada le traslado al usuario la responsabilidad en la mora en el pago de las cotizaciones al sistema general de pensiones, utilizando indebidamente la figura de la imputación de pagos contenida en el Decreto 1818 de 1996, a sabiendas que dicha administradora estaba en la obligación legal de efectuar el cobro coactivo de aportes, en acatamiento a lo dispuesto por el art. 24 de la Ley 100 de 1993, y la jurisprudencia de la H. Corte Suprema

de Justicia, motivos por los cuales decidió acceder a la corrección solicitada a excepción del ciclo mayo de 1999, pues este ya se ve asentado de manera correcta en la historia laboral más actualizada.

VI. – Grado Jurisdiccional de Consulta

La anterior decisión no fue recurrida en alzada por los apoderados judiciales de ambas partes, no obstante, al ser la providencia de primer grado desfavorable para los intereses de la entidad accionada, de la cual el Estado es garante de sus obligaciones, se dispuso la remisión del expediente a este Tribunal de Distrito Judicial, para que se surta el grado jurisdiccional de consulta a favor de COLPENSIONES, tal como lo prevé el artículo 69 del CPTSS.

Alegatos de Conclusión:

En la debida oportunidad procesal, la apoderada judicial de COLPENSIONES, presentó sus alegatos de conclusión en segunda instancia, exponiendo las razones por las cuales considera se debe revocar lo resuelto por la A Quo, pues, en su sentir, la entidad accionada no tenía conocimiento de las situaciones que dieron lugar a la imputación de pagos, y que al ser ello así, tampoco había lugar a la condena en costas procesales.

Teniendo en cuenta la anterior crónica procesal, se pasa a resolver de fondo, previas las siguientes

VII. – CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

Los presupuestos procesales, requisitos indispensables para regular la formación y desarrollo de la relación jurídica procesal, como son demanda en forma, Juez competente, capacidad para ser parte y comparecer al proceso se encuentran cumplidos a cabalidad en el caso objeto de estudio, lo cual da mérito para que la decisión que se deba tomar en esta oportunidad sea de fondo.

Naturaleza jurídica de la pretensión.- Corrección de historia laboral, imputación de pagos.

El objeto central de esta Litis, teniendo en cuenta el amplio margen que implica el grado jurisdiccional de consulta que se surte a favor de COLPENSIONES, la problemática que ha de resolver la Sala, consiste en determinar si a la señora DOLLY EUGENIA CARMONA HINCAPIÉ le asiste derecho a la corrección de la historia laboral con la inclusión de 360 días cotizados y no registrados por una presunta indebida imputación de pagos realizada por COLPENSIONES.

A efectos de dar solución a la controversia jurídica planteada, se tendrán como supuestos fácticos, probados e indiscutidos en el proceso los siguientes:

Que según la historia laboral más actualizada visible a folios 90 al 98 del expediente digital – archivo PDF 02, la señora DOLLY EUGENIA CARMONA HINCAPIÉ registra un total de 1.008,43 semanas cotizadas entre el 26 de noviembre de 1990, y el 31 de marzo de 2019, sin embargo, a partir del ciclo 1999-03 y hasta el ciclo 2013-03, COLPENSIONES aplicó una imputación de pagos sobre algunos ciclos de cotización comprendidos en ese interregno (ver Hecho Segundo), lo que implicó una reducción de 360 días que no se cargaron como semanas efectivamente cotizadas en la historia laboral.

Que al no estar de acuerdo con la imputación de pagos efectuada por COLPENSIONES, la actora elevó solicitud de corrección de historia laboral el día 1° de septiembre de 2018 (fls. 24 al 28 del expediente digital – archivo PDF 02.)

Que la entidad accionada dio respuesta a la solicitud mediante comunicado del 27 de diciembre de 2018 (fls. 54 al 57 del expediente digital – archivo PDF 02.), aduciendo que los periodos faltantes en las cotizaciones obedecieron a las siguientes novedades: imputación de pagos – Decreto 1818 de 1996, pagos inexactos, y ciclos dobles, los dos primeros derivados de moras e incumplimiento de las obligaciones por parte de algunos empleadores, así lo reconoció la entidad veamos:

En relación a los empleadores mencionados en el cuatro anterior se aclara que:
Validadas las bases de datos de COLPENSIONES se observa que con el empleador LUIS M SOSSA C identificado con Nit 14219882 efectuó pagos por concepto de Seguridad Social, los cuales no fueron suficientes para cubrir los valores totales correspondientes de las cotizaciones, quedando intereses pendientes por pagar y que de acuerdo con la imputación de pagos que trata el Decreto 1818 de 1996 y 1406 de 1999, las cotizaciones de los ciclos posteriores aplicaron a estos intereses, situación que se manifiesta en la contabilización inexacta de días o el total de días en los ciclos 199903 a 199910.

Así mismo el mismo empleador mencionado en el párrafo anterior realizó pagos inexactos de 199911 a 200002, 200007 a 200102, 200112 y 200301 por tal motivo se manifiesta en la contabilización inexacta de días o el total de días.

Ahora bien, con el empleador DANIEL JOSE ALZATE LOPEZ identificado con Nit 7552930 y JUAN CARLOS GONZALEZ GOMEZ identificado con Nit 80415122 efectuó pagos por concepto de Seguridad Social, los cuales no fueron suficientes para cubrir los valores totales correspondientes de las cotizaciones, quedando intereses pendientes por pagar para los ciclos de 200401, 200501 a 200502 y 200803 a 201201.

Imputación de pagos, y cobro coactivo de aportes a cargo de las administradoras o fondos de pensiones.

Teniendo en cuenta los hechos probados en el proceso, esto es que la entidad accionada reconoce la ocurrencia de mora y pago inexacto de algunos empleadores con los que la actora efectuó el pago de aportes al sistema de seguridad social en pensiones, concretamente en el interregno de tiempo comprendido entre los meses de marzo de 1999 y marzo de 2013, procederá la Sala a analizar si ese procedimiento de imputación de pagos realizado por la administradora pública de pensiones se encuentra o no ajustado al ordenamiento jurídico y la jurisprudencia nacional.

Y para ello es preciso recordar que con el advenimiento del sistema general de pensiones entronizado por la Ley 100 de 1993, se dio un profundo cambio al sistema de recaudo, pasándose del sistema de facturación que se traía del extinto ISS desde el año 1967, a un sistema de autoliquidación mensual de aportes, reglamentado inicialmente por el Decreto 692 de 1994, art. 23, que establecía lo siguiente:

“...Los empleadores deberán autoliquidar los aportes de sus trabajadores, tanto en el régimen de ahorro individual con solidaridad como en el de prima media con prestación definida, mediante el diligenciamiento de los formularios establecidos para el efecto por la Superintendencia Bancaria.

Dichos formularios podrán ser suministrados por las diferentes administradoras de pensiones, o en su defecto serán costeados por los respectivos empleadores.

(...)

Los formularios de liquidación de aportes se diligenciarán mensualmente. Las administradoras podrán acordar con los empleadores, la recepción de esta información en medios magnéticos o sistemas automatizados, con las especificaciones mínimas que establezca la Superintendencia Bancaria.

Igualmente, las administradoras podrán suministrar a los empleadores los respectivos programas de computador para unificar esta información”

Luego con el art. 13 del Decreto 326 de 1996, ratificó aún ese sistema de autoliquidación mensual de aportes a cargo de los empleadores, veamos:

“Artículo 13. Autoliquidación y declaración de novedades. *Los empleadores clasificados como pequeños aportantes deberán presentar declaración de novedades en la forma prevista en el artículo 15 de este decreto, y realizar el pago de las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social Integral por medios mensuales con el comprobante para el pago de aportes que generen para el efecto.*

No obstante lo dispuesto en el inciso anterior y sin perjuicio de lo previsto en el artículo 37 de este decreto, la entidad administradora podrá definir que ella generará un comprobante para el pago de los aportes cuando la declaración de novedades sea presentada en medio físico. En este evento, el aportante deberá entregar a la entidad administradora junto con el comprobante de pago la declaración de novedades. El ajuste originado en las novedades declaradas será incorporado por las entidad administradora en el siguiente comprobante de pago.

En todo caso la responsabilidad del pago es del aportante.

(...)”.

Así las cosas, quedó en manos de cada empleador efectuar el pago exacto y oportuno de sus trabajadores, reportar las novedades, e inclusive incluir en la autoliquidación de aportes los intereses de mora correspondientes, propiciándose con ello errores, fraudes, y demás circunstancias en disfavor de los trabajadores afiliados, y del propio sistema de seguridad social en pensiones.

Y para tratar de enmendar esa mora en el pago de los aportes mensuales, el legislador implemento una figura conocida como la imputación de pagos, que consistía básicamente en convertir días efectivamente cotizados en intereses de mora a favor de la administradora de pensiones, tal y como lo dispuso el art. 29 del Decreto 1818 de 1996, que modificó el art. 42 del Decreto 326 de 1996, así:

"El artículo 42 del Decreto 326 de 1996 quedará así":

"Imputación de pagos. La imputación de pagos por cotizaciones obligatorias realizadas al Sistema de Seguridad Social Integral, se efectuará teniendo en cuenta las siguientes prioridades a partir del total de lo recaudado:

(...)

3. Aplicar a intereses de mora por los aportes no pagados oportunamente.

4. Cubrir las cotizaciones obligatorias atrasadas. En el caso de pensiones, se entiende incluida la cotización para pensión de vejez, invalidez y sobrevivientes, los gastos de administración y el reaseguro con el Fondo de Garantías."

Y luego mediante el Decreto 1406 de 1999, el Gobierno Nacional modificó nuevamente la controversial figura de la imputación de pagos, veamos:

"La imputación de pagos por cotizaciones atrasadas a los Sistemas de Seguridad Social en Salud y Pensiones se efectuará tomando como base el total de lo recaudado para cada uno de dichos riesgos, y conforme a las siguientes prioridades:

1. Cubrir los aportes voluntarios de los trabajadores.

2. Cubrir las obligaciones con los fondos de seguridad.

3. Aplicar al interés de mora por los aportes no pagados oportunamente y correspondientes al período declarado.

4. Cubrir las cotizaciones obligatorias del período declarado. En el caso de pensiones, se entienden incluidos los aportes para la pensión de invalidez y sobrevivientes, al igual que los gastos de administración y reaseguro con el Fondo de Garantías (...)"

Sin embargo, esa figura de imputación de pago contenida en un decreto reglamentario entró en conflicto con la norma principal, esto es, la Ley 100 de 1993, pues esta última en su art. 24 le impuso a las administradoras y de fondos de pensiones, la obligación de efectuar el cobro coactivo de los aportes en mora, así:

“ARTÍCULO 24. ACCIONES DE COBRO. <Ver Notas del Editor> Corresponde a las entidades administradoras de los diferentes regímenes adelantar las acciones de cobro con motivo del incumplimiento de las obligaciones del empleador de conformidad con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional. Para tal efecto, la liquidación mediante la cual la administradora determine el valor adeudado, prestará mérito ejecutivo.”

Por lo tanto, y de un correcto entendimiento de esta normativa, no era viable trasladar esa obligación a los propios afiliados, a través de figuras como la imputación de pagos, pues estas moras patronales, se convirtieron en una resta de semanas cotizadas en las historias laborales de los afiliados.

Al respecto, la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de justicia desde la sentencia con radicación 34.270 del 22 de julio de 2008, tiene adoctrinado que el afiliado que tenga la condición de trabajador subordinado causa la cotización con la prestación efectiva del servicio, y si el empleador no cumple la obligación de pago oportuno y la administradora de pensiones no adelanta las acciones pertinentes para obtener el recaudo de los aportes en mora, es a ella a quien corresponde asumir el reconocimiento de la pensión en caso de que esta se llegue a causar.

La aludida postura jurisprudencial ha sido reiterada, entre otras, en las decisiones CSJ SL3023-2019, CSJ SL3112-2019, CSJ SL3807-2020, CSJ SL5058-2020 y CSJ SL5081-2020. En la última de las señaladas se indicó:

“...De entrada, advierte la Sala que el razonamiento del Colegiado de instancia no es equivocado y, por el contrario, está acorde con lo que esta Corporación, de manera reiterada y pacífica, ha establecido en su jurisprudencia en cuanto a que, para contabilizar las semanas reportadas en mora de un empleador, cuando la entidad de seguridad social no hizo acciones de cobro, es necesario acreditar que en ese lapso existió un contrato de trabajo, o en otros términos, que aquel estaba obligado a efectuar

dichas cotizaciones porque el trabajador prestó servicios en ese período (CSJ SL 34270, 22 jul. 2008, CSJ SL763-2014, CSJ SL14092-2016, CSJ SL3707-2017, CSJ SL5166-2017, CSJ SL9034-2017, CSJ SL21800-2017, CSJ SL115-2018 y CSJ SL1624-2018). Precisamente en la providencia CSJ SL3707-2017, la Sala señaló:

Ahora bien, en cuanto a las alegaciones del censor referentes a la responsabilidad en caso de mora en el pago de aportes a la seguridad social, cumple recordar que la Corte en sentencia CSJ SL, 22 jul. 2008, rad. 34270, varió su jurisprudencia y estableció que cuando se presente dicha situación, y esto impida el acceso a las prestaciones, si además medió incumplimiento de la administradora en el deber legal que tiene de cobro, es a esta última a quien le incumbe el pago de las mismas a los afiliados o sus beneficiarios.

Precisó la Corte para el caso de los afiliados en condición de trabajadores dependientes, que si han cumplido con el deber que les asiste frente a la seguridad social de prestar el servicio y así causar la cotización, no pueden salir perjudicados ellos o sus beneficiarios, por la mora del empleador en el pago de los aportes y que antes de trasladar a éste las consecuencias de esa falta, resulta menester verificar si la administradora de pensiones cumplió con el deber de cobro...”

Caso Concreto

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala procedió a realizar su propio análisis probatorio, revisando minuciosamente la historia laboral de la demandante CARMONA HINCAPIÉ, encontrando que, efectivamente, la administradora pública de pensiones aplicó imputaciones de pago, que ocasionaron que varios días de cotización se restaran de la historia laboral convirtiéndose en intereses moratorios a favor de COLPENSIONES, y por ello los siguientes ciclos de cotización quedaron incompletos: 1999-03, 1999-04, 1999-05, 1999-06, 1999-07, 1999-08, 1999-09, 1999-10, 1999-11, 1999-12, 2000-01, 2000-02, 2000-08, 2000-09, 2000-10, 2000-11, 2001-01, 2001-02, 2001-12, 2003-01, 2004-01, 2005-01, 2005-02, 2008-03, 2008-04, 2008-05, 2008-06, 2008-07, 2008-08, 2008-10, 2008-11, 2009-01, 2009-02, 2009-04, 2009-05, 2009-06, 2009-07, 2009-08, 2009-09, 2009-10, 2009-11, 2010-01, 2010-02, 2010-03, 2010-06, 2010-12, 2011-01, 2011-03, 2011-05, 2011-06, 2011-07, 2011-09, 2011-10, 2011-11, 2012-01, 2012-04, 2012-11, y 2013-03,

con los empleadores “*LUIS MARIO SOSSA CASTELLANOS*”, “*DANIEL JOSÉ ÁLZATE LÓPEZ*”, y “*JUAN CARLOS GONZÁLEZ GÓMEZ*”.

Así las cosas, los periodos con pago extemporáneo o incompleto no computados a la demandante, ascienden a 360 días equivalentes a **51,42** semanas, los cuales deberán ser cargados a su historia laboral como semanas efectivamente cotizadas como bien lo concluyó la funcionaria judicial de primer grado, quien adecuó su decisión a la jurisprudencia nacional para resolver la presente litis, pues, ante la existencia de periodos en mora por parte de algún empleador, le correspondía a la entidad de seguridad social ejercer las acciones de cobro, pues esa inactividad no puede perjudicar los derechos del trabajador, siempre que se demuestre la existencia de vínculo contractual con el trabajador, que es lo que da lugar al pago de aportes, y en el presente caso la misma administradora de pensiones reconoce la existencia de ese vínculo laboral y la mora en el pago de aportes, así quedó evidenciado en la respuesta brindada a la demandante de fecha 27 de diciembre de 2018 (fls. 54 al 57 del expediente digital – archivo PDF 02.).

Ahora, en relación a la condena en costas procesales en primera instancia, punto que menciona la apoderada de Colpensiones en sus alegatos de conclusión en esta instancia, considera la sala que no hay lugar a exonerar a Colpensiones de dicha condena toda vez que, para la fecha en que se realizó la solicitud de corrección de historia laboral, ya era pacífica la jurisprudencia del órgano de cierre en cuanto a que no podía trasladársele al afiliado los perjuicios derivados de las moras patronales a través de las figuras como la imputación de pagos ya analizada.

Corolario de lo anterior, y al no existir más asuntos que deban ser conocidos en consulta a favor de COLPENSIONES, la sentencia de primera instancia será CONFIRMADA en su integridad.

Sin costas en esta instancia, al haberse conocido el proceso bajo el grado jurisdiccional que es un trámite oficioso.

VIII. - DECISIÓN.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Tercera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia objeto de consulta de origen y fecha conocidos, según lo expuesto en precedencia.

SEGUNDO: Sin COSTAS en esta instancia.

TERCERO: En su debida oportunidad, devuélvase el expediente al juzgado de origen.

CUARTO: SE ORDENA la notificación por EDICTO de esta providencia, que se fijará por secretaría por el término de un día, en acatamiento a lo dispuesto por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en auto AL2550-2021.

Los magistrados


MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
Magistrada


ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA
Magistrado


LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL
Magistrada